



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2008.

ACTOR: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.**

1165

En México, Distrito Federal, a dieciséis de julio de dos mil ocho, **se da cuenta a los Ministros Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre Anguiano**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de vacaciones de dos mil ocho, con el escrito y anexos suscrito por el Magistrado Presidente y representante del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, recibido el quince del mes en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y registrado con el número **33110**. Conste.

México, Distrito Federal, a dieciséis de julio de dos mil ocho.

De conformidad con los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de abril de dos mil ocho, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

Con el escrito y anexos de cuenta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien comparece en representación del Poder Judicial de la entidad, **fórmese y regístrese** el expediente relativo a la controversia constitucional que plantean en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de los municipios, todos de la ciudad entidad federativa.

Con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **este asunto le corresponde por razón de turno al Ministro Mariano Azuela Güitrón**, como instructor del



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

procedimiento según el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal; no obstante, esta Comisión de receso proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario.

Lo anterior, por la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, en el cual se solicita la suspensión del acto impugnado, por lo que, de conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la citada Ley Reglamentaria, se habilitan los días inhábiles que se requieran para llevar a cabo la notificación de este acuerdo.

En el escrito de cuenta, el promovente solicita la invalidez de los actos siguientes:

“IV.I.- Se demanda la invalidez del Decreto emitido por la Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, en su sesión ordinaria de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, mediante el cual SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS: el primer párrafo de la fracción XXXVII del artículo 40; el artículo 86 en su primer párrafo; el párrafo primero del artículo 89; la fracción III del artículo 90; el artículo 92; la fracción I del artículo 92-A; los artículos 108 y 109; el segundo párrafo del artículo 109-bis; y, el párrafo segundo del artículo 109-ter; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS: la fracción XXXV y un segundo párrafo a la fracción XXXVII del artículo 40, recorriéndose el párrafo segundo para pasar a ser tercero; la fracción VIII del artículo 56; los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo al artículo 89; la fracción VII y un último párrafo al artículo 90; la fracción VIII al artículo 92-A; se adiciona el capítulo IV denominado DE LA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DEFENSORÍA PÚBLICA con los artículos 106 y 107; el capítulo V denominado DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, que comprende los artículos 108 y 109; los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 109-bis; los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 109-ter, recorriéndose el tercero, cuarto y quinto actuales, para convertirse en los párrafos sexto, séptimo y octavo; y, SE DEROGA EL ARTÍCULO: 103; todos, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Así como de sus artículos TRANSITORIOS. Precisamente, de aquellas normas en contra de las cuales se enderezan conceptos de invalidez."

1166

Con apoyo en los artículos 4°, primer párrafo y 11, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, de conformidad con la documental que exhibe al efecto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en su demanda y como delegados a las personas que menciona.

Por otra parte, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: **"El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo**

manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.”

En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la citada Ley Reglamentaria, que prevé:

“Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;”.

En relación a esa causa de improcedencia, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 12/99, que a continuación se transcribe:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.- La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está substanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.”.

(Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos setenta y cinco).

Así, del criterio jurisprudencial que antecede y de lo dispuesto en la invocada fracción VI, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, se advierte que esa causa de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, respecto del cual pueden darse los supuestos siguientes:

- 1) Que exista una vía legalmente prevista en contra del acto impugnado que no se haya agotado previamente, mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, para dar solución al conflicto;
- 2) Que habiendo hecho valer la vía o medio legal, todavía no se haya dictado resolución, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto combatido; y,
- 3) Que los actos impugnados se hayan emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente el dictado de la resolución definitiva.

El presente asunto se ubica en la última de las hipótesis mencionadas, ya que el decreto legislativo impugnado proviene de un procedimiento no concluido.

Al respecto, el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de su representante legal, demanda la invalidez del Decreto legislativo emitido por la Quincuagésima Legislatura del Poder Legislativo estatal, en su sesión ordinaria de diecisiete de junio de dos mil ocho, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado, cuyo decreto, a la fecha de presentación de la demanda no se ha publicado en el correspondiente medio de difusión oficial, lo cual admite expresamente el promovente en el capítulo de suspensión de la demanda e inclusive solicita la medida cautelar respecto de la promulgación y publicación del decreto legislativo impugnado, en los términos siguientes:

“Se solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentra, quedando en suspenso la promulgación y publicación del Decreto aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, en su sesión de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, habiéndose determinado por el Pleno de la mencionada Legislatura, que se remitiese el Decreto de que se trata, para su promulgación y publicación, el día primero de julio del mismo año, sin que a la fecha se haya promulgado y publicado el señalado Decreto, por el que se reforman, adicionan y deroga, diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.”

En cuanto a la expedición, promulgación y publicación de las leyes, la Constitución Política del Estado de Morelos, en su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

texto vigente, a la fecha de presentación de la demanda, establece:

1168

“Artículo 40.- Son facultades del Congreso:

(. . .)

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado.

Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I.- Al Gobernador del Estado.

II.- A los Diputados al Congreso del mismo.

III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la administración de justicia.

IV.- A los Ayuntamientos.

V.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de esta Constitución.

Artículo 43.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más diputados y por los ciudadanos, pasarán desde luego a la comisión respectiva del Congreso.

Artículo 44.- Para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto, necesita en votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura; la sanción y promulgación del Ejecutivo y su publicación en el órgano oficial del Estado; excepto en los casos expresamente determinados por esta Constitución.

Artículo 47.- Los Proyectos de Leyes o Decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, los

publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de diez días siguientes.

(. . .)

Artículo 70.- Son facultades u obligaciones del Gobernador del Estado:

I.- Presentar al Congreso las iniciativas de leyes o decretos que estime convenientes.

II.- Hacer observaciones a los proyectos de leyes o decretos que apruebe y le remita el Congreso.

(. . .)

XVII.- Promulgar y hacer cumplir las Leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, así como expedir los reglamentos necesarios. para la buena marcha de los asuntos estatales, para lo que tendrá a su cargo el Periódico Oficial del Estado, como órgano de difusión;

En lo que interesa a la solución de este asunto, de los preceptos que anteceden se deduce, por una parte, que las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado de Morelos, deben enviarse al Ejecutivo estatal para su sanción y promulgación.

Por otra parte, si el Ejecutivo del Estado no tiene observaciones a los Proyectos de Leyes o Decretos aprobados por el Congreso local, debe ordenar su publicación oficial, cuyo acto es necesario para que tales proyectos tengan el carácter de ley o decreto, excepto en los casos que expresamente determina la propia Constitución local.

En estas condiciones, el Decreto legislativo emitido por la Quincuagésima Legislatura del Poder Legislativo estatal, en su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sesión ordinaria de diecisiete de junio de dos mil ocho, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado, ante la falta de su publicación oficial, a la fecha de presentación de la demanda, no tiene el carácter de ley, en tanto deriva del proceso legislativo no concluido, cuya publicación es necesaria para su aplicación y observancia obligatoria.

Por tanto, la controversia constitucional es improcedente porque a la fecha de presentación de la demanda (15 de julio de este año), el citado decreto legislativo constituye un acto derivado de un procedimiento no concluido y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la citada Ley Reglamentaria, la cual es manifiesta y notoria, en virtud de que deriva de la simple lectura de la demanda y sus anexos, sin necesidad de sustanciar el procedimiento.

Tiene aplicación por su contenido, la jurisprudencia P./J. 79/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, pagina 915, cuyo rubro y texto, son los siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO QUE NO ES DEFINITIVO EN EL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL DEL CUAL FORMA PARTE. De los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para que las reformas y adiciones propuestas en una iniciativa de ley formen parte del orden jurídico nacional es necesario que se agoten todas las etapas contempladas en el proceso legislativo. Ahora bien, si la Cámara Revisora desecha un dictamen sometido a su consideración por la Cámara de Origen para que ésta lo reexamine con base en las observaciones formuladas, es indudable que tal proceso legislativo -incluido el dictamen impugnado- no puede reputarse como definitivo para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, pues todavía está pendiente la resolución de la Cámara de Origen, o bien, el resultado del procedimiento previsto en el citado artículo 72, inciso d), de la Constitución Federal y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia.”

Conviene aclarar que aun cuando a la fecha en que se emite el presente proveído, es probable que ya se haya publicado el decreto legislativo impugnado, lo cierto es que su análisis debe circunscribirse a la fecha de presentación de la demanda (quince de julio del presente año), en la cual se contiene la expresión de voluntad del promovente para impugnar un acto que no es definitivo. Además, de haberse producido ese hecho, lo que no aparece de las constancias de autos, resulta obvio que quienes estén legitimados para promover una controversia constitucional, estarán en posibilidad de hacerlo dentro del plazo legal correspondiente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la Materia, se acuerda:

I. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional que hace valer el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de la entidad.

II. Notifíquese por lista y por oficio al promovente.

III. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Lo proveyeron y firman los **Ministros Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre Anguiano**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de vacaciones de dos mil ocho, que actúan con la licenciada Claudia Gabriela Soto Calleja, Secretaria de la citada Comisión, que da fe.

A

Esta hoja corresponde al proveído de dieciséis de julio de dos mil ocho, dictado por los **Ministros Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre Anguiano**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de vacaciones de dos mil ocho, en la controversia constitucional **83/2008**, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Conste.